



Asamblea General

Distr. general
11 de julio de 2025
Español
Original: inglés

Octogésimo período de sesiones

Tema 72 b) del programa provisional*

**Promoción y protección de los derechos humanos:
Cuestiones de derechos humanos, incluidos otros
medios de mejorar el goce efectivo de los derechos
humanos y las libertades fundamentales**

La extrema pobreza y los derechos humanos

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, de conformidad con lo dispuesto en la resolución [53/10](#) del Consejo de Derechos Humanos.

* [A/80/150](#).



Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter

El populismo de ultraderecha y el futuro de la protección social

Resumen

En el presente informe, el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, examina el futuro de la protección social en el contexto del auge del populismo de ultraderecha en todas las regiones del mundo. Destacando la transformación de la protección social y el consiguiente aumento de la desconfianza hacia las instituciones, explica cómo esta desconfianza alimenta el aumento del populismo de ultraderecha, que se nutre de la inseguridad económica y el temor a perder el estatus. El Relator Especial expone cómo el populismo de ultraderecha siembra división al explotar el descontento hacia las élites en el poder como pretexto para dismantelar el sistema del bienestar, lo que en última instancia favorece los intereses de los sectores privilegiados; o fomentar el chovinismo del bienestar, que restringe la protección social al endogrupo y a los denominados “pobres merecedores”, contradiciendo así el principio de que la protección social es un derecho humano. El Relator Especial concluye explicando por qué debe defenderse la protección social basada en los derechos como un baluarte contra el auge del populismo autoritario.

I. Introducción

1. La democracia está en peligro. En todas las regiones del mundo, los últimos años han sido testigos del auge de partidos populistas de ultraderecha, que pretenden apoderarse de la democracia. Una vez en el poder, atacan la independencia de los tribunales y los medios de comunicación; limitan el espacio cívico; desacreditan a sus oponentes políticos calificándolos de traidores o “antipatriotas”, y eluden a los parlamentos para concentrar el poder¹.

2. Los populistas de ultraderecha atraen a un grupo cada vez más numeroso de votantes, con un discurso que combina el sentimiento antielitista, con una mentalidad de enfrentamiento entre “nosotros” y “ellos”, presentándose como defensores del endogrupo frente al exogrupo, y atacando el feminismo y los derechos de las mujeres. Este discurso resulta especialmente atractivo para el electorado que teme perder su estatus y se siente amenazado por los cambios culturales y económicos, y resuena especialmente entre los hombres que experimentan inseguridad económica y viven en regiones rezagadas.

3. En el cumplimiento de su mandato de evaluar los avances en la lucha contra la pobreza, el Relator Especial no puede ignorar esta ola de populismo de ultraderecha. En gran medida, el auge de esta corriente política obedece precisamente al sentimiento de abandono por parte del Estado y a la percepción de traición por parte de los políticos convencionales, lo que lleva a muchas personas a depositar su confianza en las promesas de la ultraderecha. Sin embargo, ya sea que esta corriente se vea impulsada por una agenda libertaria que pretende dismantelar los servicios públicos, o por una agenda nacionalista centrada en la exclusión, su ascenso al poder conlleva una forma perniciosa de chovinismo del bienestar que excluye a las personas marginadas, a saber: los migrantes y los “pobres no merecedores”. Lo que ahora se necesita para hacer frente a esa tendencia es una protección social que una en lugar de dividir y que proteja en lugar de castigar: eso es lo que significa una protección social basada en los derechos.

II. El Estado del bienestar punitivo

4. La reciente evolución de los sistemas de protección social podría explicar el creciente nivel de desconfianza hacia el Estado y los partidos políticos tradicionales. De hecho, las contribuciones recibidas para la elaboración de este informe ponen de relieve la aparición de una distopía del bienestar, caracterizada por un aumento de la vigilancia, el control social y un enfoque paternalista en la protección social. Se trata de un sistema de protección social en el que las poblaciones vulnerables son objeto de seguimiento y tratadas como personas que deben ser “corregidas” en lugar de apoyadas. Han surgido tres esferas principales de preocupación.

A. La activación de la asistencia social

5. La primera esfera de preocupación es el auge de las políticas de activación, a veces descritas como el paso del Estado del bienestar (*welfare*) a la prestación de asistencia condicionada a la participación en el mercado laboral (*workfare*). La prestación de asistencia social está cada vez más supeditada a que las personas beneficiarias busquen trabajo activamente por lo que el monto y, sobre todo, la duración de las prestaciones por desempleo, se reducen de forma drástica con el fin

¹ Stephen Haggard y Robert Kaufman, *Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World* (Cambridge University Press, 2021).

de incentivar a quienes buscan empleo a buscar trabajo activamente. Aunque a menudo se ha reforzado el apoyo individualizado a los solicitantes de empleo por medio de agencias públicas de empleo (pese a que a veces se subcontrata a agencias privadas seleccionadas por concurso), también se ha intensificado la amenaza de sanciones. En varios sistemas de asistencia social, negarse a aceptar una oferta de trabajo o no participar en programas de capacitación o sesiones de asistencia para la búsqueda de empleo conlleva la pérdida temporal o permanente de las prestaciones².

6. Esta es una tendencia generalizada. En Francia, desde 2024, la renta de solidaridad activa (*revenu de solidarité active*) ha incluido la obligación de que los beneficiarios realicen al menos 15 horas semanales de actividades³ pese a las fuertes reservas expresadas por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos⁴ y el Consejo Nacional de Políticas para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social⁵, que temen que este requisito aumente el abuso institucional. En el Reino Unido, los requisitos de búsqueda de empleo fueron un componente importante de la introducción, en 2012, del Crédito Universal, que reunió en un solo programa seis prestaciones sujetas a comprobación de ingresos que antes se gestionaban por separado. Gracias a ello, el Departamento de Trabajo y Pensiones puede efectuar deducciones de las prestaciones de seguridad social de los beneficiarios que no cumplan sus obligaciones de búsqueda de empleo⁶.

7. En Alemania, la percepción del ingreso ciudadano (*Bürgergeld*), una prestación que pueden solicitar quienes buscan empleo cuando han agotado su derecho a las prestaciones por desempleo, está condicionada a aceptar cualquier empleo que se considere “adecuado” según la Oficina de Empleo y al cumplimiento de la obligación de asistir a las citas programadas y comunicar cualquier cambio de circunstancias⁷. En marzo de 2024 se reintrodujo la posibilidad de imponer “sanciones totales”, que permiten a las autoridades retener hasta el 100 % de las prestaciones durante dos meses si el solicitante incumple sus obligaciones de búsqueda de empleo, si bien se contempla cierta discrecionalidad en casos de “dificultades excepcionales” (*außergewöhnliche Härte*)⁸.

8. Aunque la introducción de condicionalidades en los regímenes de desempleo y asistencia social parece acelerar la transición de la asistencia social al empleo⁹, también puede dar lugar a prácticas discriminatorias por parte de los servicios sociales, que tienden a imponer sanciones precisamente a quienes más necesitan apoyo. En el Reino Unido, se constató que las sanciones se imponían de forma desproporcionada a solicitantes con escasa experiencia laboral y formación, o que se

² Oliver De Schutter, “Welfare State reform and social rights”, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 33, núm. 2 (junio de 2015), págs. 123 a 162.

³ Ley núm. 2023-1196 de 18 de diciembre de 2023 sobre el pleno empleo.

⁴ Véase la declaración de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, “Loi pour le plein emploi: l’obligation d’heures d’activité en contrepartie du RSA porte atteinte aux droits humains” (19 de diciembre de 2024).

⁵ Véase el dictamen del Consejo Nacional de Políticas para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, “Loi pour le plein emploi: pour une sécurisation des droits et des ressources des allocataires du RSA” (marzo de 2025).

⁶ Reino Unido, Departamento de Trabajo y Pensiones, “Universal Credit and your claimant commitment” (consultado el 13 de febrero de 2025).

⁷ Alemania, Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, “Citizen’s benefits: basic income support for jobseekers – Book II of the Social Code (SGB II), Questions and answers”, enero de 2023.

⁸ Alemania, Libro II del Código Social (SGB II), secciones 31, 31 a) y 31b), página 13, párrafo 4.4.

⁹ Gerard van den Berg, Bas van der Klaauw y Jan van Ours, “Punitive sanctions and the transition rate from welfare to work”, *Journal of Labor Economics*, vol. 22, núm. 1 (enero de 2004), págs. 211 a 241.

enfrentaban a obstáculos prácticos para acceder al empleo (por ejemplo, la falta de transporte propio). Como en muchos otros países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los solicitantes de asistencia social jóvenes, los que tienen familias numerosas y las personas pertenecientes a grupos étnicos negros y minoritarios corren un mayor riesgo¹⁰.

9. La imposición de condicionalidades relacionadas con la búsqueda de empleo aumenta la vulnerabilidad de poblaciones ya marginadas y agrava el estigma de los solicitantes. También puede tener consecuencias negativas para la salud mental y fomentar el distanciamiento respecto de los programas de asistencia social, hasta el punto de que muchas personas deciden no solicitar esas ayudas. Estos son dos fenómenos que el Relator Especial ha documentado en profundidad¹¹. En el Reino Unido, la introducción desde 2010 de programas centrados en la reducción del número de beneficiarios y la inserción laboral rápida ha aumentado algo el empleo, pero ha empeorado los niveles de depresión y ansiedad, en especial entre los progenitores de niños en edad preescolar, debido al mayor estrés asociado a las responsabilidades de cuidado y la presión para empezar a trabajar¹². También se ha constatado que las políticas de activación llevan a muchas personas a aceptar empleos precarios, que ofrecen poca seguridad de los ingresos y una limitada conciliación de la vida laboral y personal. En estos casos, el “progreso” se define únicamente como un aumento del número de horas trabajadas o de los ingresos, en lugar de tener en cuenta una mejora de la satisfacción, la seguridad o el desarrollo en el empleo. Los trabajadores se ven atrapados en una “trampa de empleos precarios”, obligados a aceptar cualquier puesto bajo amenaza de sanciones, y con una capacidad limitada de rechazar ofertas o acceder a formación¹³.

10. Además, esta activación de la asistencia social conlleva un aumento del control sobre los beneficiarios, para garantizar que cumplen las condiciones impuestas. Como puso de relieve recientemente un estudio de una investigación participativa realizado en Suiza¹⁴, los sistemas de asistencia social tienden gradualmente a adoptar un carácter punitivo. Disciplinan a los beneficiarios para que adopten ciertas formas de comportamiento¹⁵ y reflejan un juicio paternalista sobre ciertos estilos de vida¹⁶, lo que suele conducir a la estigmatización¹⁷. Aunque las personas deberían poder conciliar el empleo con la vida familiar y personal, y contar con una protección social adecuada para evitar verse forzadas a aceptar empleos inadecuados o quedar expuestas a situaciones de vulnerabilidad por motivos de cuidado o acontecimientos vitales, ese equilibrio entre trabajo, vida personal y asistencia social se ve alterado,

¹⁰ Véase <https://martin-evans.org/assets/files/JRFsanctions.pdf>.

¹¹ Véase A/79/162, párrs. 30 a 32; y A/HRC/50/38, párrs. 54 a 58. Véase también Sarah Baird, Craig McIntosh y Berk Özler, “Cash or condition? Evidence from a cash transfer experiment”, *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 126, núm. 4 (octubre de 2011), págs. 1709 a 1753.

¹² Marcia Gibson *et al.*, “Intervenciones de transición de la asistencia social al empleo y efectos sobre la salud mental y física de padres solteros y sus hijos”, *The Cochrane database of systematic reviews 2017*, núm. 8, artículo núm. CD009820.

¹³ Katy Jones, Sharon Wright y Lisa Scullion, “The impact of welfare conditionality on experiences of job quality”, *Work, Employment and Society*, vol. 38, núm. 6 (diciembre de 2024), págs. 1658 a 1679.

¹⁴ ATD Quart Monde Suisse, *Rapports entre institutions, société et personnes vivant dans la pauvreté en Suisse : une expérience de violence qui continue (2023)*.

¹⁵ Frances Fox Piven y Richard A. Cloward, *Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare* (Nueva York, Vintage Books, 1971).

¹⁶ Emma Saunders-Hastings, “Welfare paternalism and objections from equality”, *Critical Review of International Social and Political Philosophy* (diciembre de 2024), págs. 1 a 26.

¹⁷ Sharon Wright, Del Roy Fletcher y Alasdair B. R. Stewart, “Punitive benefit sanctions, welfare conditionality, and the social abuse of unemployed people in Britain: transforming claimants into offenders?”, *Social Policy and Administration*, vol. 54, núm. 2 (febrero de 2020), págs. 278 a 294.

ya que se requiere cada vez más tiempo para buscar empleo, incluso en el caso de los trabajadores pobres que están ocupando empleos precarios, a quienes ahora también se les exige cumplir con requisitos de búsqueda activa de empleo¹⁸.

11. Basándose en las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)¹⁹, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT confirmó que solo se puede exigir a una persona solicitante de empleo que acepte trabajos que ofrezcan un “empleo conveniente” cuando se enfrente a la amenaza de perder las prestaciones por desempleo. Lo que constituye un “empleo conveniente” se define en el párrafo 2 del artículo 21 del Convenio sobre el Fomento del Empleo y la Protección contra el Desempleo, 1988 (núm. 168). La Comisión ha aclarado que el hecho de que un empleo sea “conveniente” o no, dependerá del tiempo de desplazamiento desde el domicilio de la persona solicitante de empleo hasta el lugar de trabajo (teniendo en cuenta los medios de transporte disponibles y el tiempo total pasado fuera de casa)²⁰; del nivel de remuneración ofrecido (un empleo no puede considerarse conveniente si la remuneración ofrecida es inferior a lo que razonablemente podría esperar la persona solicitante)²¹; y de si el empleo propuesto se corresponde con las competencias, cualificaciones, experiencia adquirida y duración del servicio en la ocupación anterior de la persona solicitante (al menos durante el período mínimo de protección de las prestaciones por desempleo)²². Por tanto, la Comisión no deja lugar a dudas de que un empleo “conveniente” no es simplemente un empleo “razonable” que la persona pueda desempeñar, es decir, para el que esté física y mentalmente capacitada y suficientemente cualificada²³. Los intentos de debilitar los criterios de lo que constituye un empleo “adecuado”, con el pretexto de acelerar la transición de la asistencia social al empleo, van en contra del objetivo central del Convenio núm. 168 de la OIT, que es fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido (arts. 2 y 7). Al verse empujadas a ocupar cualquier puesto de trabajo disponible, las personas beneficiarias de asistencia social también pueden desplazar a los trabajadores poco cualificados de ocupaciones a las que, de otro modo, podrían acceder, aumentando así su riesgo de desempleo de larga duración y de exclusión.

12. Más allá de las repercusiones negativas ya señaladas, los programas de activación pueden erosionar el tejido social. Las personas sujetas a condiciones para acceder a la asistencia social tienden a reducir su participación política y cívica²⁴. Además, estos programas enmarcan la pobreza como un fracaso individual, en lugar

¹⁸ Katy Jones, Sharon Wright y Lisa Scullion, “The impact of welfare conditionality on experiences of job quality”, *Work, Employment and Society*, vol. 38, núm. 6 (diciembre de 2024), págs. 1658 a 1679.

¹⁹ Convenio sobre el Desempleo, 1934 (núm. 44), Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), 1952 (núm. 102) y Convenio sobre el Fomento del Empleo y la Protección contra el Desempleo, 1988 (núm. 168).

²⁰ Solicitud directa a Bélgica de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en 2012 y publicada en la 102ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2013).

²¹ Solicitud directa al Brasil de la Comisión de Expertos de la OIT, adoptada en 2019 y publicada en la 109ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021).

²² Solicitud directa a Dinamarca de la Comisión de Expertos de la OIT, adoptada en 2006 y publicada en la 96ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2007).

²³ Solicitud directa al Reino Unido de la Comisión de Expertos de la OIT, adoptada en 2020 y publicada en la 109ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021); observación relativa a Noruega de la Comisión de Expertos de la OIT, adoptada en 2007 y publicada en la 97ª reunión (2008); y solicitud directa a Noruega de la Comisión de Expertos de la OIT, adoptada en 1999 y publicada en la 88ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2000).

²⁴ Sara Watson, “Does welfare conditionality reduce democratic participation?”, *Comparative Political Studies*, vol. 48, núm. 5 (abril de 2015), págs. 645 a 686.

de como una responsabilidad de la sociedad²⁵, y la protección social como un favor que el Estado puede conceder en las condiciones que considere oportunas, en lugar de como un derecho que la persona puede reivindicar frente al Estado. Esto da lugar a la percepción entre el público de que quienes dependen de la ayuda social, especialmente en forma de asistencia social (en contraposición a los seguros sociales a los que han contribuido), se están beneficiando potencialmente de una forma de caridad pública.

13. Esto puede generar desconfianza hacia el Estado: si este es demasiado generoso, se le acusará de recompensar a los que se aprovechan del sistema (los llamados “pobres no merecedores” o “vagos”); pero si es demasiado estricto e impone condiciones de búsqueda de empleo poco realistas y punitivas, generará descontento entre los propios beneficiarios de la asistencia.

B. La digitalización de la asistencia social

14. La segunda esfera de preocupación es la utilización de algoritmos para detectar posibles abusos en los sistemas de protección social. El anterior Relator Especial advirtió en 2019 de una “distopía de bienestar digital”²⁶. Esto es ya una realidad²⁷.

15. En Francia, en 2022 se descubrió que la entidad responsable de las prestaciones familiares (Caisse d'allocations familiales) estaba analizando los datos personales de más de 32 millones de personas para detectar posibles abusos del sistema de asistencia social, utilizando algoritmos que se centraban de forma desproporcionada en las personas beneficiarias del régimen de ingreso mínimo (*revenu de solidarité active*), los hogares monoparentales y las personas con discapacidad. Aunque los hogares monoparentales representaban solo el 16 % de los beneficiarios, eran objeto del 36 % de las investigaciones administrativas, y los hogares que cambiaban de residencia frecuentemente o destinaban más del 35 % de sus ingresos al alquiler eran investigados más sistemáticamente por posible fraude²⁸.

16. En el Reino de los Países Bajos, la Administración Tributaria y Aduanera acusó erróneamente a 26.000 progenitores, muchos de origen inmigrante, de haber presentado solicitudes fraudulentas de prestaciones entre 2005 y 2019, exigiéndoles la devolución íntegra de los subsidios percibidos. El Gobierno del país dimitió en enero de 2021 en medio del escándalo²⁹.

17. En el Reino Unido, más de 700 subdirectores de correos fueron acusados falsamente entre 1999 y 2015 de robo, fraude y contabilidad falsa, basándose en datos recabados por un sistema informático (Horizon) que, según descubrieron posteriormente los tribunales, contenía “fallos, errores o anomalías”³⁰. También en el Reino Unido, más de 134.000 familias se vieron obligadas a devolver las prestaciones

²⁵ Eva Maria Cox, “Conditionality and control: its implications for groups on welfare and some particular issues for Indigenous people and women”, *Social Alternatives* vol. 39, núm. 1 (enero de 2020), págs. 54 a 59.

²⁶ Véase [A/74/493](#).

²⁷ Gijsbert Vonk, “Welfare state dystopia as a challenge to the fundamental right of social security”, *European Journal of Social Security*, vol. 27, núm. 2 (junio de 2025), págs. 82 a 97.

²⁸ Véase <https://dubasque.org/discrimination-numerique-le-fleau-des-algorithmes-des-caf-confirme-aah-rsa-familles-monoparentales/>; y <https://www.01net.com/actualites/fraude-aux-allocations-familiales-la-caf-utilise-bien-des-algorithmes-qui-ciblent-les-plus-precaires-selon-la-quadrature-du-net.html>.

²⁹ Véase el informe de la comisión parlamentaria sobre el escándalo: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf.

³⁰ Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal), *Hamilton and others v. Post Office Limited*, 23 de abril de 2021, EWCA Crim 577, resumen, párr. 11.

para cuidadores, debido a que no se les había informado de que no se podían percibir dichas prestaciones (un subsidio semanal de 81,90 libras para quienes cuidan a alguien durante más de 35 horas semanales) si se superaba el límite de ingresos de 151 libras semanales (el equivalente a poco más de 13 horas de trabajo remunerado con el salario mínimo). Los sobrepagos (que representaban un total de 250 millones de libras) ascendían a menudo a varios miles de libras por hogar, lo que dejó a muchos hogares en una grave situación económica tras reclamarles el reembolso³¹.

18. En Australia, el plan Robodebt, puesto en marcha en 2016, comparó los datos obtenidos de los empleadores con los ingresos declarados por los beneficiarios de prestaciones sociales y detectó 866.857 casos de presuntos sobrepagos de prestaciones sociales en el período 2010-2013. En efecto, a un gran número de beneficiarios de la seguridad social se les exigió injustamente el reembolso de deudas que nunca existieron, lo que causó enormes perjuicios³².

19. Estos ejemplos proceden de países de renta alta, pero la digitalización también está avanzando rápidamente en los países de renta baja y media, en parte debido al despliegue de registros sociales. Estos registros “dinámicos” son bases de datos que recaban y analizan información personal para determinar el derecho a la seguridad social, basándose normalmente en algoritmos que determinan ese derecho en función de criterios como el empleo, la propiedad de bienes como automóviles, televisores o viviendas, o el consumo de electricidad o agua. Entre 2013 y 2022, en gran parte gracias al apoyo del Banco Mundial, el número de países que utilizaban registros sociales aumentó de 23 a 60³³. Aunque esta infraestructura digital supuestamente ayuda a orientar las ayudas en función de pruebas de evaluación indirecta de medios económicos, también puede dar lugar a errores y exclusiones injustificadas, sobre todo en ausencia de recursos legales fácilmente accesibles en caso de clasificación errónea.

C. El papel punitivo de los trabajadores sociales

20. En las consultas realizadas para la preparación del presente informe, el Relator Especial también quedó impactado por la crisis cada vez más profunda que experimentan los trabajadores sociales. Su función consiste en brindar apoyo y empoderar, facilitando a las personas el acceso a soluciones. Sin embargo, cada vez más se espera que ejerzan una forma de control sobre las personas que acuden a ellos en busca de ayuda, y que se aseguren de que los beneficiarios no abusen del sistema reclamando prestaciones a las que no tienen derecho o eludiendo las condiciones impuestas. Esto pone en peligro su integridad profesional. En el principio 9.4 de la Declaración Global de Principios Éticos del Trabajo Social se sitúa la premisa de “no abusar de sus posiciones de poder” y construir “relaciones de confianza con las personas con las que se relacionan” en el centro de la práctica del trabajo social³⁴: esa promesa es cada vez más difícil de cumplir.

21. Los trabajadores sociales también tienen la misión de proteger a la infancia del “descuido”, lo que puede dificultar la creación de vínculos de confianza con los progenitores a quienes intentan ayudar. La pobreza en sí misma no debe considerarse como causa de posible “descuido” del niño que justifique la adopción de medidas coercitivas contra los progenitores (incluida, en los casos más graves, la separación

³¹ Véase <https://parliamentnews.co.uk/carers-allowance-overpayment-debt-hit-250m-audit-reveals> (consultado el 29 de junio de 2025).

³² Catherine Holmes, *Royal Commission into the Robodebt Scheme (Report, Volume 1)* (Commonwealth de Australia, 2023).

³³ Grupo Banco Mundial, *Charting a Course Towards Universal Social Protection: Resilience, Equity, and Opportunity for All* (Washington D.C., 2022), pág. 57.

³⁴ Véase <https://www.ifsw.org/declaracion-global-de-los-principios-eticos-del-trabajo-social/>.

del niño de la familia). Sin embargo, se alertó al Relator Especial de que, en la práctica, “el descuido es a menudo un sustituto sutilmente velado de la pobreza”. Las familias que sufren inestabilidad de la vivienda, inseguridad alimentaria y dificultades económicas tienen muchas más probabilidades de perder la custodia de sus hijos³⁵.

22. En los Estados Unidos de América, la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso a Menores de 1974 (CAPTA)³⁶ exige que los estados que reciben financiación federal para sus sistemas de bienestar infantil incluyan el “descuido” como causa de pérdida de la custodia de menores. El descuido, sin embargo, se define generalmente como a) la falta de servicios médicos, odontológicos, quirúrgicos, de atención infantil, de comportamiento y de otro tipo; b) la falta de suministro de las necesidades básicas, como alimentación, nutrición, vestimenta, educación y vivienda; c) la falta de supervisión del menor; y d) las circunstancias de los progenitores, incluidas enfermedades mentales, trastornos del desarrollo y violencia doméstica. Por tanto, hay una considerable superposición entre el riesgo de “descuido” y la pobreza³⁷. Las leyes de notificación obligatoria, que obligan a los profesionales a denunciar posibles casos de maltrato infantil, han dado lugar a un aumento drástico de las denuncias: de 60.000 en 1974, cuando se promulgó la CAPTA, a 2 millones en 1990, y a casi 4,4 millones en 2023³⁸, con un impacto desproporcionado en las familias de raza negra³⁹.

23. En Australia Occidental, se constató que las autoridades de protección infantil consideraban como descuido ciertas condiciones vinculadas a la pobreza, como la falta de hogar, con consecuencias desproporcionadas para los hogares de bajos ingresos y las familias aborígenes⁴⁰. Los niños aborígenes tienen casi 20 veces más probabilidades de ser separados de sus familias que los niños no indígenas⁴¹. En algunos de los casos investigados por Human Rights Watch, el gobierno no proporcionó el apoyo adecuado a los progenitores que necesitaban alojamiento de emergencia, incluidas las víctimas de violencia doméstica, lo que en última instancia dio lugar a que los servicios de protección infantil separaran a los niños de sus progenitores. En otras palabras, las autoridades impusieron una severa sanción a las familias por un fallo del propio gobierno en materia de asistencia social.

24. Estas tres dimensiones distópicas del bienestar: activación, digitalización y control, operan de forma combinada. La digitalización de la asistencia social facilita la ampliación de las condicionalidades, ya que permite no solo una mayor vigilancia de los beneficiarios, sino también la imposición automatizada de sanciones cuando se sospecha de fraude. Esto incluye la recuperación de prestaciones concedidas que se consideren injustificadas. Los regímenes de protección infantil se basan cada vez más

³⁵ Children’s Rights, JMACforFamilies y Angela Olivia Burton, *Welfare and Control: The U.S. Child Welfare System*, presentación al Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (febrero de 2025). Para el caso de Francia, véase *Assemblée nationale (session 2024-2025), Commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, compte rendu de la séance du 13 novembre 2024* (13 de noviembre de 2024).

³⁶ Estados Unidos de América, Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso a Menores, Ley Pública núm. 93-247 de 31 de enero de 1974.

³⁷ Human Rights Watch, “*If I Wasn’t Poor, I Wouldn’t Be Unfit*”. *The Family Separation Crisis in the US Child Welfare System* (noviembre de 2022).

³⁸ Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Administración para Niños y Familias, Administración de Niños, Jóvenes y Familias, Oficina de la Infancia, *Child Maltreatment 2023* (2025), pág. xiii.

³⁹ Benard P. Dreyer, “Racial/ethnic bias in pediatric care and the criminalization of poverty and race/ethnicity – seek and ye shall find”, *JAMA Pediatrics*, vol. 174, núm. 8 (agosto de 2020), págs. 751 a 752.

⁴⁰ Secretariat of National Aboriginal and Islander Child Care, *Family Matters Report 2024* (2024).

⁴¹ Human Rights Watch, “*All I Know Is I Want Them Home*”. *Disproportionate Removal of Aboriginal Children from Families in Western Australia* (marzo de 2025).

en algoritmos de evaluación de riesgos para determinar la probabilidad de que un niño sea víctima de malos tratos por parte de su familia basándose en factores como la recepción de asistencia pública, la participación previa en sistemas de protección infantil o la residencia en determinadas zonas geográficas⁴². Asimismo, se está transformando a los trabajadores sociales en operadores de sistemas digitalizados, evaluados en función de indicadores cuantitativos clave del desempeño que los propios trabajadores consideran incompatibles con el establecimiento de relaciones basadas en la confianza con las familias a las que ayudan. Los riesgos asociados incluyen el sesgo algorítmico, la exclusión de grupos vulnerables, la opacidad y la falta de medidas judiciales de reparación. Además, la transición hacia políticas de activación y la mayor dependencia de la vigilancia digital crean un entorno social en el que las personas se sienten estigmatizadas y vigiladas en lugar de sentirse apoyadas. Esto fomenta una opinión pública alienada que se siente a la vez culpada por su situación de pobreza y despojada de su dignidad. El populismo de ultraderecha recoge los frutos de lo que se ha sembrado.

III. El auge del populismo de ultraderecha

25. Estas distopías del bienestar alimentan una creciente desconfianza hacia las instituciones. Al insistir en que la protección social debe ser “merecida” y endurecer los requisitos o imponer condiciones más estrictas, se transmite el mensaje de que el apoyo es un privilegio y no un derecho. Ese tipo de planteamientos corren el riesgo de fomentar divisiones sociales, enfrentando a quienes no tienen nada con quienes tienen aún menos, y de reforzar el temor a ser dejados atrás. Además, el debilitamiento de los sistemas de protección al pasar del Estado del bienestar a la prestación de asistencia condicionada a la participación en el mercado laboral crea inseguridad económica, lo que aumenta la probabilidad de que la población vote a plataformas populistas de ultraderecha que se aprovechan de esas ansiedades⁴³.

26. La respuesta frente al auge de la ultraderecha, por tanto, debe pasar por aliviar la ansiedad ante el futuro. Las encuestas sociales europeas muestran que, cuando las prestaciones por desempleo se sitúan en los niveles más bajos, existe un 25 % de probabilidad de que las personas desempleadas voten por la ultraderecha (frente al 15 % en el caso de las personas empleadas). Sin embargo, este efecto desaparece cuando se incrementan dichas prestaciones. Del mismo modo, unos niveles de pensión más elevados, la existencia de un salario mínimo legal y la mejora de las prestaciones por hijos a cargo tienen un impacto estadísticamente mensurable en la disminución de la probabilidad de apoyar opciones de ultraderecha⁴⁴.

27. No obstante, más allá de las condiciones individuales como el desempleo o los bajos ingresos, lo que alimenta el populismo radical de ultraderecha es el temor a perder el estatus⁴⁵. Los políticos de ultraderecha cultivan el resentimiento. Apelan a las emociones: exaltan el amor a la patria, fomentan el miedo al extranjero y alimentan la indignación contra unas élites corruptas y culpables de poner en peligro el bienestar

⁴² Anjana Samant *et al.*, “Family surveillance by algorithm: the rapidly spreading tools few have heard of”, American Civil Liberties Union, 29 de septiembre de 2021.

⁴³ Denis Ivanov, “Economic insecurity, institutional trust and populist voting across Europe”, *Comparative Economic Studies*, vol. 65, núm. 3 (septiembre de 2023), págs. 461 a 482.

⁴⁴ Tim Vlandas y Daphne Halikiopoulou, “Welfare state policies and far right party support: moderating ‘insecurity effects’ among different social groups”, *West European Politics*, vol. 45, núm. 1 (2022), págs. 24 a 49.

⁴⁵ Pippa Norris y Ronald Inglehart, *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism* (Nueva York, Cambridge University Press, 2019).

nacional⁴⁶. Crean “ciudadanos ansiosos” (la figura “besorgte Bürgers”, surgida en los debates en Alemania), cuyos temores son en parte fruto de esta manipulación emocional⁴⁷. En los Estados Unidos, la sensación de amenaza al estatus experimentada por la proporción cada vez menor de estadounidenses que tradicionalmente han ostentado posiciones de privilegio (es decir, personas blancas, cristianas y hombres), así como por quienes ven amenazado el dominio mundial del país, alimentó el apoyo a un candidato presidencial, Donald Trump, que centró su discurso en restaurar las jerarquías de estatus del pasado⁴⁸. Tales sentimientos no son del todo irracionales. Están vinculados a cambios sociales reales que afectan a los votantes y a su sensación de inseguridad⁴⁹. Si no se responde a esos temores, se corre el riesgo de agravar el sentimiento de alienación entre las personas ya marginadas, cuya sensación de que se les trata con falta de respeto o condescendencia no hará sino aumentar.

A. El veneno de las desigualdades

28. El aumento de las desigualdades es uno de los principales factores que permite comprender el auge del populismo de derechas. De 2002 a 2016, el apoyo a los partidos populistas en Europa aumentó del 13 % a más del 20 %, mientras que el coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos de mercado aumentó, en promedio, de 45 a 49. En un estudio que abarcó 14 países europeos durante ese período se constató que un aumento de un punto en el índice de Gini de desigualdad de ingresos disponibles se asociaba con un aumento de un punto en el apoyo a los partidos populistas, lo que marca una correlación casi perfecta⁵⁰. El fracaso de las élites políticas a la hora de reducir las desigualdades fomenta la desconfianza entre los grupos de la sociedad que son dejados atrás, sobre todo porque se ve amenazada la movilidad social⁵¹. La desigualdad también alimenta lo que, en informes anteriores⁵², el Relator Especial ha denominado ansiedad de estatus⁵³. Un estudio realizado en Finlandia demostró que, incluso en un Estado con un sólido sistema de asistencia social, los votantes que esperan perder su estatus en el futuro (normalmente, personas de clase media baja que luchan por no quedarse atrás) tienen más probabilidades de verse tentados a votar a la ultraderecha que los que ya han experimentado una pérdida de su estatus y viven con ingresos bajos⁵⁴.

29. Se requieren políticas mucho más contundentes para reducir las desigualdades. En los últimos 40 años, el péndulo ha pasado de las políticas de asistencia social

⁴⁶ Matthew Levinger, “Love, fear, anger: the emotional arc of populist rhetoric”, *Narrative and Conflict: Explorations in Theory and Practice*, vol. 6, núm. 1 (enero de 2018), págs. 1 a 21; Yotam Margalit, “Economic insecurity and the causes of populism, reconsidered”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 33, núm. 4 (2019), págs. 152 a 170.

⁴⁷ Carolin Emcke, *Gegen den Hass* (Fráncfort, S. Fischer Verlag, 2016).

⁴⁸ Diana C. Mutz, “Status threat, not economic hardship, explains the 2016 presidential vote”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 115, núm. 19 (mayo de 2018).

⁴⁹ Donatella Bonansinga, “Who thinks, feels. The relationship between emotions, politics and populism”, *Partecipazione e Conflitto*, vol. 13, núm. 1 (2020), págs. 83 a 106.

⁵⁰ Lukas F. Stoetzer, Johannes Giesecke y Heike Klüver, “How does income inequality affect the support for populist parties?”, *Journal of European Public Policy*, vol. 30, núm. 1 (2023), págs. 1 a 20.

⁵¹ Véase A/76/177, párr. 40.

⁵² Véase A/79/162, párr. 14.

⁵³ Noam Gidron y Peter A. Hall, “The politics of social status: economic and cultural roots of the populist right”, *The British Journal of Sociology*, vol. 68, núm. S1 (noviembre de 2017): S57-84.

⁵⁴ Zhen Jie Im *et al.*, “With status decline in sight, voters turn radical right: how do experience and expectation of status decline shape electoral behaviour?”, *European Political Science Review*, vol. 15, núm. 1 (febrero de 2023), págs. 116 a 135.

solidarias a la insistencia en recompensar el “mérito” e incentivar a las personas a adquirir competencias y adoptar formas de comportamiento que les permitan triunfar como agentes económicos productivos. Sin embargo, la promoción del “mérito”, centrada en la igualdad de oportunidades, incluso cuando se combina con la prohibición de la discriminación por motivos de desventaja socioeconómica⁵⁵, no puede sustituir a la redistribución mediante las políticas fiscales y de transferencias típicas de los Estados del bienestar sólidos (a veces denominadas políticas de igualdad de resultados)⁵⁶. Sin mejoras en las condiciones de vivienda, el acceso a la educación y alimentación nutritiva para la infancia, así como condiciones de trabajo decentes, incluidos salarios dignos para los empleos más precarios y peor remunerados en la base de la escala de ingresos⁵⁷, no habrá igualdad de oportunidades, y los discursos sobre la “meritocracia” seguirán sonando poco convincentes e incluso engañosos⁵⁸.

B. Zonas desatendidas

30. El auge del populismo de ultraderecha tiene una marcada dimensión territorial. Las regiones que se quedan rezagadas, por ejemplo, a causa del declive económico derivado de la globalización⁵⁹, tienden con mayor frecuencia a votar a partidos de ultraderecha⁶⁰. El populismo aumenta con las conmociones económicas, que generan inseguridad⁶¹. Esas conmociones pueden reforzar la identificación con determinados grupos sociales (como la clase trabajadora blanca), acentuando las identidades étnicas, y dando lugar a reivindicaciones de mayor protección frente a la competencia extranjera⁶². Por tanto, en Francia, el auge del Frente Nacional entre 1995 y 2012 puede vincularse a la exposición a la competencia de las importaciones procedentes de países con salarios bajos⁶³. La misma dinámica se observa cuando se reduce la prestación de servicios públicos. En Italia, tras la restricción del acceso a los servicios públicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes en 2010, el apoyo a los partidos de ultraderecha (como la Lega (Nord) y Fratelli d'Italia) aumentó en los municipios afectados en comparación con los que no se vieron afectados por la reforma⁶⁴. En las zonas en declive desatendidas por los servicios públicos, donde se reducen los servicios postales, se cierran las estaciones de tren pequeñas y no hay

⁵⁵ Véase [A/77/157](#).

⁵⁶ François Dubet, *Les places et les chances. Repenser la justice sociale* (París, Seuil, 2010).

⁵⁷ Véase [A/78/175](#).

⁵⁸ Véase [A/76/177](#), párrs. 38 a 39.

⁵⁹ David Autor *et al.*, “Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure”, *American Economic Review*, vol. 110, núm. 10 (octubre de 2020), págs. 3139 a 3183; Italo Colantone y Piero Stanig, “The trade origins of economic nationalism: import competition and voting behavior in Western Europe”, *American Journal of Political Science*, vol. 62, núm.4 (octubre de 2018), págs. 936 a 953; Dani Rodrik, “Populism and the economics of globalization”, *Journal of International Business Policy*, vol. 1, núm. 1-2 (junio de 2018), págs. 12 a 33.

⁶⁰ Dominik Schraff y Jonas Pontusson, “Falling behind whom? Economic geographies of right-wing populism in Europe”, *Journal of European Public Policy*, vol. 31, núm. 6 (2024), págs. 1591 a 1619.

⁶¹ Yotam Margalit, “Economic insecurity and the causes of populism, reconsidered”, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 33, núm. 4 (2019), págs. 152 a 170.

⁶² Gene M. Grossman y Elhanan Helpman, “Identity politics and trade policy”, documento de trabajo núm. 25348 del National Bureau of Economic Research (2018); Dani Rodrik, “Why does globalization fuel populism? Economics, culture, and the rise of right-wing populism”, *Annual Review of Economics*, vol. 13 (agosto de 2021), págs. 133 a 170.

⁶³ Clément Malgouyres, “Trade shocks and far-right voting: evidence from French presidential elections”, documento de trabajo RSCAS 2017/21 del Instituto Universitario Europeo.

⁶⁴ Simone Cremaschi *et al.*, “Geographies of discontent: public service deprivation and the rise of the far right in Italy”, *American Journal of Political Science* (diciembre de 2024).

acceso a Internet de banda ancha, crece el resentimiento contra las élites políticas⁶⁵, a las que se percibe como desconectadas de la realidad cotidiana de la población⁶⁶.

31. Este fenómeno se manifiesta con especial intensidad en las regiones geográficas con marcadores culturales persistentes asociados a un estatus inferior, como el uso de dialectos o lenguas no estándar, que tienen más tendencia a experimentar el sentimiento de “ser dejado atrás”, y donde hay niveles más elevados de rechazo hacia las élites y resentimiento hacia el exogrupo. En Alemania, el aumento del apoyo a *Alternative für Deutschland* fue especialmente acusado en las comunidades periféricas con mayor prevalencia de formas de alemán no estándar (o dialectal)⁶⁷. Estudios etnográficos como los llevados a cabo en el enclave industrial en deterioro de Dagenham, Reino Unido⁶⁸, en barrios pobres del norte o el este de Francia⁶⁹, o en diversas comunidades de los Estados Unidos, en Ohio, Luisiana o Wisconsin⁷⁰, ilustran cómo los residentes de estas zonas desatendidas sienten amenazada su identidad cultural y su estatus social.

32. Los residentes de esas localidades suelen percibir a los inmigrantes como una amenaza, al competir por la atención de la clase política y por el acceso a las prestaciones sociales. Consideran que los recursos se distribuyen de forma desproporcionada en favor de las élites urbanas y, en particular, las minorías. Sin embargo, el “resentimiento territorial” no se limita a las zonas rurales. En las ciudades también puede surgir malestar hacia las normas electorales que favorecen a las zonas rurales y debilitan la representación urbana, y las personas que viven en las zonas suburbanas pueden sentirse menospreciadas cuando se invierte en infraestructuras urbanas en lugar de hacerlo en carreteras para los trabajadores que se desplazan desde los suburbios⁷¹. En el Reino de los Países Bajos, por ejemplo, existe una fuerte correlación entre los indicadores de habitabilidad regional y el apoyo al partido de ultraderecha *Partij voor de vrijheid* (PVV), lo que lleva a algunos analistas a proponer políticas de cohesión regional como elemento clave para combatir el auge del populismo de ultraderecha⁷².

⁶⁵ Pauliina Patana, “Residential constraints and the political geography of the populist radical right: evidence from France”, *Perspectives on Politics* vol. 20, núm. 3 (septiembre de 2022), págs. 842 a 859.

⁶⁶ Katherine J. Cramer, *The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker* (Chicago, University of Chicago Press, 2016).

⁶⁷ Daniel Ziblatt, Hanno Hilbig y Daniel Bischof, “Wealth of tongues: why peripheral regions vote for the radical right in Germany”, *American Political Science Review*, vol. 118, núm. 3 (agosto de 2024), págs. 1480 a 1496.

⁶⁸ Diane Bolet, “Drinking alone: local socio-cultural degradation and radical right support – the case of British pub closures”, *Comparative Political Studies*, vol. 54, núm. 9 (agosto de 2021), págs. 1653 a 1692.

⁶⁹ Didier Eribon, *Retour à Reims* (París, Fayard, 2009); Benoît Coquard, *Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin* (París, La Découverte, 2019).

⁷⁰ Arlie Russell Hochschild, *Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right* (Nueva York, The New Press, 2016); Justin Gest, *The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality* (Nueva York, Oxford University Press, 2016); Cramer, *The Politics of Resentment*.

⁷¹ B. Kal Munis, “Us over here versus them over there...literally: measuring place resentment in American politics”, *Political Behavior*, vol. 44 (2022), págs. 1057 a 1078; Andrés Rodríguez-Pose, “The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”, *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, vol. 11, núm. 1 (marzo de 2018), págs. 189 a 209.

⁷² Eveline S. van Leeuwen y Solmaría Halleck Vega, “Voting and the rise of populism: spatial perspectives and applications across Europe”, *Regional Science Policy & Practice*, vol. 13, núm. 2 (abril de 2021), págs. 209 a 219.

C. Cambio climático y resentimiento populista

33. En esas zonas desatendidas, el temor a quedarse atrás se ve agravado por el cambio climático. En primer lugar, los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, como las inundaciones o las sequías, pueden causar importantes conmociones económicas, lo que lleva a las comunidades a apoyar partidos que aprovechan el resentimiento hacia las élites u ofrecen narrativas identitarias en respuesta a la crisis⁷³. En informes anteriores, el Relator Especial instó a los Gobiernos a reforzar la protección social para proteger a las poblaciones de los impactos del cambio climático, subrayando su papel esencial en la adaptación⁷⁴. Más allá de este imperativo de derechos humanos, contar con una protección social sólida también puede mitigar el riesgo de que aumente el resentimiento en las comunidades más afectadas por los riesgos climáticos.

34. En segundo lugar, la transición ecológica en sí genera nuevas ansiedades. En Europa, aunque existe un amplio consenso entre los partidos políticos mayoritarios en cuanto a la necesidad de adoptar políticas climáticas ambiciosas, la derecha radical ha pasado de ignorar en gran medida el cambio climático a convertirlo en un tema altamente politizado. Al cuestionar las políticas de mitigación, el populismo de ultraderecha se diferencia de la corriente dominante y atrae a un electorado escéptico respecto a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los recursos energéticos fósiles⁷⁵. En el Reino de los Países Bajos, por ejemplo, un aumento del impuesto al gas natural para los hogares entre 2007 y 2020, a pesar de que estuvo acompañado de subvenciones redistributivas para energías renovables, se asoció a un aumento de entre 5 y 6 puntos porcentuales en la probabilidad de que los inquilinos con facturación individual de los servicios votaran a partidos de ultraderecha, que eran los únicos que se oponían a la transición energética⁷⁶.

35. En informes anteriores, el Relator Especial señaló que una “transición justa” podría proteger a los hogares de bajos ingresos de los posibles efectos adversos de las políticas de mitigación del cambio climático, y evitar alimentar el resentimiento contra las élites⁷⁷. En este informe, el Relator reitera ese llamamiento.

D. La erosión del capital social

36. Las circunscripciones electorales también son más propensas a verse tentadas a votar a la derecha radical cuando se rompen los vínculos sociales que mantienen unidas a las comunidades. En el Reino Unido, la desaparición de los *pubs* comunitarios agravó el aislamiento social, lo que provocó un aumento del apoyo al Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), contrario a la inmigración. En

⁷³ Simone Cremaschi y Piero Stanig, “Voting and climate change: how an extreme weather event increased support for a radical-right incumbent in Italy”, *The Journal of Politics* (junio de 2025); Joakim Kulin e Ingemar Johansson Sevä, “Rightwing populist attitudes and public support for climate policies in Western Europe: widening the scope using the European Social Survey”, *PLOS Climate*, vol. 3, núm. 10 (2024).

⁷⁴ Véase [A/HRC/59/51](#).

⁷⁵ Zachary P. Dickson y Sara B. Hobolt, “Going against the grain: climate change as a wedge issue for the radical right”, *Comparative Political Studies*, vol. 58, núm. 8 (julio de 2025), págs. 1733 a 1759 (una ilustración de la estrategia mediante un estudio que abarca casi medio millón de comunicados de prensa de 76 partidos políticos de nueve democracias europeas).

⁷⁶ Erik Voeten, “The energy transition and support for the radical right: evidence from the Netherlands”, *Comparative Political Studies*, vol. 58, núm. 2 (febrero de 2025), págs. 394 a 428. <https://doi.org/10.1177/001041402412374>.

⁷⁷ Véase [A/75/181/Rev.1](#); y [A/HRC/56/61](#).

los distritos donde cerró al menos un *pub* comunitario adicional (en relación con el número total de *pubs* del distrito) los residentes tenían una probabilidad 4,3 puntos porcentuales mayor de votar por el UKIP que por cualquier otro partido⁷⁸.

37. La erosión de la vida comunitaria puede reforzar entre los desfavorecidos la percepción de que el sistema no funciona para ellos, y las “masas inertes” de personas que han perdido la fe en la política pueden ser fácilmente manipuladas por demagogos⁷⁹. De hecho, un sociólogo que comparaba el nazismo y el fascismo con el macartismo en los Estados Unidos a finales de la década de 1950 llegó a la conclusión de que los más vulnerables a las artimañas de los demagogos son precisamente aquellos “que tienen menos oportunidades de participar en la vida formal e informal de la comunidad”⁸⁰. La falta de conexión social y la abstención política, por un lado, y la tentación del extremismo político, por otro, no son los dos extremos de un espectro, sino dos reacciones posibles al sentimiento de aislamiento social y de resentimiento hacia las élites y los partidos políticos mayoritarios que las representan⁸¹.

38. Sin embargo, la relación entre la pérdida de capital social y el auge del populismo de ultraderecha plantea cuestiones complejas. Una forma de reconstruir el capital social consiste en reconstituir los vínculos dentro de las comunidades entre personas que comparten ciertas características. Si bien el fortalecimiento de estos vínculos comunitarios puede resultar beneficioso en un contexto en el que las personas se sienten aisladas y crece la desconfianza, la recreación de este capital social “cohesivo” puede tener el efecto no deseado de intensificar los enfrentamientos identitarios entre comunidades. De hecho, aunque el auge del partido de ultraderecha Alternative für Deutschland en Alemania ha sido especialmente notable en regiones afectadas por un fuerte éxodo, que alimenta el sentimiento de abandono entre la población, sus repercusiones se dejaron sentir especialmente entre las personas implicadas en redes cívicas. Más que un sentimiento individual de abandono, es el sentimiento compartido de “ser dejados atrás juntos” lo que lleva a apoyar a los populistas de ultraderecha⁸².

39. Otro enfoque consiste en reforzar los vínculos sociales entre comunidades, creando nuevas redes de solidaridad entre personas que tradicionalmente han tenido poco en común: lo que se conoce como capital social “conector”⁸³. Este segundo enfoque es más difícil de lograr, pero como el Relator Especial explica más adelante, resulta esencial para mantener la función protectora del Estado del bienestar frente a los intentos de los políticos populistas de ultraderecha de polarizar a la sociedad y presentar la protección social como algo que beneficia al exogrupo en detrimento del endogrupo.

IV. El populismo de ultraderecha y la protección social

40. En este contexto, los populistas de ultraderecha afirman representar a la “gente corriente” frente a las “élites”. Sin embargo, en muchos casos, ellos mismos forman

⁷⁸ Bolet, “Drinking alone”.

⁷⁹ Robert D. Putnam, *Our Kids: The American Dream in Crisis* (Nueva York, Simon & Schuster, 2015), págs. 239 a 240.

⁸⁰ William Kornhauser, *The Politics of Mass Society* (Glencoe, Illinois, The Free Press, 1959), pág. 212.

⁸¹ Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism* (Nueva York, Harcourt, Brace & Company, 1951), pág. 310.

⁸² Stephan Schütze, “Left behind together and voting for populism: regional out-migration, civic engagement and the electoral success of populist radical right parties”, *Social Sciences*, vol. 12, núm. 8 (agosto de 2023).

⁸³ Sobre esta distinción, véase Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Nueva York, Simon & Schuster, 2000).

parte de la élite y deben su ascenso en la política a la riqueza de su familia o a sus conexiones sociales. Una vez en el poder, suelen tratar de mantener los privilegios de la misma élite económica a la que critican en sus discursos⁸⁴.

41. De hecho, este informe se está ultimando mientras el Congreso de los Estados Unidos aprueba el proyecto de ley *One Big Beautiful Bill Act* de 2025, una legislación que ilustra casi como una caricatura el “populismo de los privilegiados”. El proyecto de ley contempla una reducción del 30 % en la financiación federal del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, del que actualmente dependen 40 millones de personas. En consecuencia, se prevé que 7 millones de personas, entre ellas más de 2 millones de niños, perderán total o parcialmente esta asistencia alimentaria, ya que los estados no podrán compensar el déficit de financiación resultante⁸⁵. El proyecto de ley también recorta más de un billón de dólares del programa Medicaid y transferirá 93.000 millones de dólares de financiación federal a los estados entre 2031 y 2034⁸⁶. Como consecuencia, al menos 13,7 millones de personas vulnerables perderán su cobertura sanitaria⁸⁷, y los hospitales y centros de salud, obligados a asumir mayores costos por atender a las personas no aseguradas, tendrán que reducir servicios y personal, o simplemente cerrar.⁸⁸ Dado que el proyecto de ley combina estos recortes masivos a las redes de seguridad social con recortes fiscales y aumentos del gasto en defensa y seguridad fronteriza, se producirá una gran transferencia de recursos de los hogares del decil más bajo de la distribución del ingreso a los hogares del decil más alto⁸⁹ y, al mismo tiempo, aumentará el déficit primario en 2,4 billones de dólares en la próxima década⁹⁰.

42. De manera similar, el Brasil, bajo su anterior presidente, Jair Bolsonaro (2019-2022), sustituyó el programa Bolsa Familia por Auxílio Brasil, una iniciativa que, a pesar de su aumento temporal de los estipendios, carecía de salvaguardias jurídicas y fiscales sólidas e imponía condiciones de admisibilidad que excluían a muchas de las poblaciones más vulnerables del país⁹¹. Los recortes en los programas de salud pública, asistencia social y seguridad alimentaria profundizaron las desigualdades existentes, dejando a más de la mitad de los hogares brasileños en situación de inseguridad alimentaria en 2021⁹².

43. Incluso cuando no desmantelan el Estado del bienestar, los partidos populistas de ultraderecha tienden a socavar su lógica. Fomentan el paso de la protección a la disciplina, reforzando una creencia cultural e institucional en el productivismo: la idea de que solo quienes contribuyen económicamente merecen protección. Esta

⁸⁴ Benjamin De Cleen y Juan Alberto Ruiz Casado, “Populism of the privileged: on the use of underdog identities by comparatively privileged groups”, *Political Studies*, vol. 72, núm. 3 (agosto de 2024), págs. 1005 a 1025.

⁸⁵ Center on Budget and Policy Priorities, “By the numbers: House Republican reconciliation bill takes food assistance away from millions of people”, informe de políticas, 6 de junio de 2025.

⁸⁶ Oficina de Presupuesto del Congreso, *Estimated Budgetary Effects of an Amendment in the Nature of a Substitute to H.R. 1, the One Big Beautiful Bill Act, Relative to the Budget Enforcement Baseline for Consideration in the Senate* (27 de junio de 2025).

⁸⁷ Oficina de Presupuesto del Congreso, *Estimated Budgetary Effects of a Bill to Provide for Reconciliation Pursuant to Title II of H. Con. Res. 14, the One Big Beautiful Bill Act* (20 de mayo de 2025).

⁸⁸ Phil Galewitz *et al.*, “5 ways Trump’s tax bill will limit health care access”, NPR, 3 de julio de 2025.

⁸⁹ Oficina de Presupuesto del Congreso (véase la nota a pie de página 87).

⁹⁰ Committee for a Responsible Federal Budget, “Breaking down the One Big Beautiful Bill”, 4 de junio de 2025.

⁹¹ Camila Mikie Nakaharada *et al.*, *Workers’ Rights and Social Protection in Brazil: Legal and Policy Gaps* (São Paulo y Amsterdam, Conectas Human Rights y OECD Watch, 2022), págs. 20 y 21.

⁹² *Ibid.*

lógica sustenta la exclusión de los inmigrantes, los desempleados e incluso los trabajadores con salarios bajos⁹³. Se traza una línea divisoria entre el endogrupo, al que se trata de proteger, y el exogrupo, que (según estos partidos) no merece protección⁹⁴. Intentan controlar cómo se proporciona el bienestar, a menudo mediante prácticas clientelistas. Al considerar la burocracia asociada al Estado del bienestar como un posible obstáculo a su poder⁹⁵, tienden a eludirla o debilitarla, a veces para ofrecer formas más directas de apoyo que aseguren lealtades políticas.

44. El chovinismo del bienestar consiste en reservar la protección social al endogrupo nacional, excluyendo a los demás: migrantes y, a veces, minorías étnicas que, aunque lleven muchos años residiendo en el Estado, no poseen la ciudadanía. En Europa, el repentino aumento de refugiados procedentes de la República Árabe Siria en 2015 provocó un aumento significativo de estas formas de exclusión, promovidas por los partidos de ultraderecha⁹⁶. Si bien el aumento de este tipo de actitudes se documentó en particular en los países de Europa Central y Oriental⁹⁷, la opinión de que los inmigrantes necesitan obtener la ciudadanía antes de tener acceso equitativo a las prestaciones sociales, pese a ser incompatible con las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos⁹⁸, ha cobrado fuerza en los últimos años incluso en países tradicionalmente abiertos, como los escandinavos⁹⁹.

45. Los populistas de ultraderecha fomentan las actitudes chovinistas con respecto al bienestar, ya que pueden presentarse convenientemente como defensores de la protección social a la que tiene derecho la población nativa, frente a las reivindicaciones de otros grupos. Este discurso resulta especialmente atractivo para los miembros de la población nativa que se enfrentan a la inseguridad económica y temen quedarse atrás, lo que los lleva a percibir a los integrantes del exogrupo como competidores por unos recursos públicos escasos, en contextos de altos déficits públicos. Estos grupos de personas marginadas son en particular, los inmigrantes, pero también incluyen a personas consideradas como “no merecedoras” de asistencia por su falta de voluntad para trabajar y su dependencia prolongada de la asistencia pública. El apoyo al partido *Rassemblement National* en Francia, por ejemplo, se ha comparado con la idea de una “delimitación moral”¹⁰⁰, en la que los votantes tratan de desvincularse de quienes consideran unos aprovechados (“assistés”) y, a su juicio, abusan del sistema de protección social e intentan “colarse en la fila” sin merecerlo.

⁹³ Jellen Olivares-Jirsel, “Recalibration, not austerity: welfare States and the struggle for liberalism”, *Populism & Politics*, European Center for Populism Studies (diciembre de 2024), págs. 1 a 21.

⁹⁴ István Benczes, “Taking back control over the economy: from economic populism to the economic consequences of populism”, *European Policy Analysis*, vol. 8, núm. 1 (2022), págs. 109 a 123.

⁹⁵ Attila Bartha, Zsolt Boda y Dorottya Szikra, “When populist leaders govern: conceptualising populism in policy making”, *Politics and Governance*, vol. 8, núm. 3 (2020), págs. 71 a 81.

⁹⁶ Rosan Haenraets y Femke Roosma, “Welfare chauvinism in times of crises: the impact of the radical right political discourse”, *Journal of European Social Policy*, vol. 34, núm. 2 (mayo de 2024), págs. 159 a 174.

⁹⁷ Lee Savage, “Preferences for redistribution, welfare chauvinism, and radical right party support in Central and Eastern Europe”, *East European Politics and Societies and Cultures*, vol. 37, núm. 2 (mayo de 2023), págs. 584 a 607.

⁹⁸ Véase la declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre las obligaciones de los Estados con respecto a los refugiados y los migrantes en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/2017/1).

⁹⁹ David Andreas Bell, Marko Valenta y Zan Strabac, “Nordic welfare chauvinism: a comparative study of welfare chauvinism in Sweden, Norway and Finland”, *International Social Work*, vol. 66, núm. 6 (noviembre de 2023), págs. 1786 a 1802.

¹⁰⁰ Raphaël Challier, “S’engager au Front national pour ne plus être des “cassos”? Le rôle du mépris de classe dans une campagne municipale”, *Sociétés contemporaines*, vol. 119, núm. 3 (2020), págs. 61 a 87.

Quienes votan por la ultraderecha buscan así reconstruir una identidad positiva basada en el “trabajo” y el “mérito”. Esta actitud se ve reforzada por la percepción de que los principales partidos políticos ya no representan los intereses de la “gente corriente”¹⁰¹. De hecho, los propios partidos de izquierdas tienden a atraer sobre todo a profesionales del sector de servicios¹⁰², y las élites políticas están conformadas de manera desproporcionada por personas adineradas y con estudios superiores¹⁰³.

46. Esta postura también se ve reforzada por la idea de que el Estado del bienestar es “ineficaz” y “despilfarrador”, de que “los derechos sociales no son derechos sino prebendas otorgadas a un grupo parásito” y de que, por tanto, las restricciones en materia de bienestar se justifican por la necesidad de gestionar mejor los recursos públicos¹⁰⁴. Esto explica, por ejemplo, el éxito electoral de Javier Milei en la Argentina. En el momento de su elección, el 86 % de la población argentina consideraba que la economía atravesaba un mal momento, alrededor de una cuarta parte de la población se veía afectada por la inseguridad alimentaria y la confianza en la política democrática iba en declive (solo el 68 % de los ciudadanos expresaba su apoyo a la democracia en 2023, frente al 90 % en 2008)¹⁰⁵. Desde entonces, el Sr. Milei ha recortado drásticamente el gasto público y los programas de protección social, ha vetado el aumento de las pensiones y reducido los medicamentos gratuitos para los jubilados. El poder adquisitivo de las pensiones mínimas es hoy un 5,3 % inferior al que tenían en noviembre de 2023, y el monto apenas cubre el 30 % de la canasta básica de alimentos de las personas de edad. En nombre de la austeridad, el Gobierno de la Argentina también ha reducido la cobertura de medicamentos: 800.000 personas de edad ya no reciben medicamentos a través del seguro público de salud. Además, la inversión pública se ha detenido: en la Argentina ya no se construyen escuelas, jardines infantiles, centros de salud, hospitales ni viviendas. En consecuencia, son las personas en situación de pobreza quienes están pagando el precio más alto por el restablecimiento del equilibrio fiscal¹⁰⁶.

47. Del mismo modo, la victoria electoral de 2014 del partido Bharatiya Janata (BJP) en la India se ha atribuido a la frustración de una población que ha sido testigo del aumento de las desigualdades y de la persistencia del desempleo, así como de la alta informalidad y precariedad del trabajo, a pesar del fuerte crecimiento económico. El BJP atribuyó el desempeño económico desigual de la Alianza Progresista Unida liderada por el Congreso Nacional Indio, que gobernó la India entre 2004 y 2014, a políticas ineficaces y élites incompetentes, y el Narendra Modi fue elegido para gobernar con la promesa de menos derechos pero más empleos¹⁰⁷. En otras palabras, el auge del nacionalismo hindú en la India y la facilidad con que se usa a las minorías, como los musulmanes, los pueblos tribales y los dalits, como chivos expiatorios, pueden atribuirse al fracaso de los Gobiernos anteriores a la hora de garantizar que el

¹⁰¹ Armin Schäfer, “Return with a vengeance: working class anger and the rise of populism”, Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Sociales, 8 de agosto de 2017.

¹⁰² Frederick Solt, “Economic inequality and democratic political engagement”, *American Journal of Political Science*, vol. 52, núm. 1 (enero de 2008), págs. 48 a 60.

¹⁰³ Jane Gingrich y Silja Häusermann, “The decline of the working-class vote, the reconfiguration of the welfare support coalition and consequences for the welfare state”, *Journal of European Social Policy*, vol. 25, núm. 1 (febrero de 2015), págs. 50 a 75.

¹⁰⁴ Tricontinental: Instituto de Investigaciones Sociales, “To confront rising neofascism, the Latin American left must rediscover itself”, expediente núm. 79 (agosto de 2024), pág. 29.

¹⁰⁵ Virginia Oliveros y Emilia Simison, “Why did Argentina just elect a radical right-wing political outsider?”, *Journal of Democracy*, noviembre de 2023; Gabriel Vommaro, *La ultraderecha en Argentina: entre el oportunismo y la innovación de Milei* (Fundación Friedrich Ebert, 2023).

¹⁰⁶ Centro de Estudios Legales y Sociales, *La Cocina de Los Cuidados*, Informe núm. 5, junio de 2025.

¹⁰⁷ Louise Tillin, “The political economy of populism in India”, King’s College de Londres, 7 de mayo de 2024.

crecimiento económico beneficie a todos los grupos de población mediante inversiones en infraestructura y servicios públicos¹⁰⁸.

V. La protección social como contención frente al populismo de ultraderecha

48. Dado que el auge de la ultraderecha es más marcado en las regiones donde la población siente que ha sido dejada atrás y teme la transición ecológica, la prestación de servicios públicos universales y de protección social resulta fundamental para frenar esa evolución. No obstante, en sociedades caracterizadas por la división étnica y en las que la pobreza está estrechamente relacionada con el origen étnico o el estatus migratorio, un sistema de bienestar percibido como excesivamente generoso puede alimentar el resentimiento entre los votantes nacionales, quienes sienten que compiten con los migrantes por el acceso a los beneficios¹⁰⁹. En efecto, existe una correlación estadísticamente significativa entre las desigualdades y el voto etnonacionalista: cuanto más teme la población quedarse atrás en un contexto marcado por la persistencia de la desigualdad, más tiende a aferrarse a su identidad de grupo¹¹⁰.

49. Así pues, los partidos políticos mayoritarios se enfrentan a un dilema: si las políticas redistributivas se perciben como más beneficiosas para el endogrupo que para los nacionales, podrían generar rechazo y alimentar el resentimiento y, por tanto, el apoyo a la ultraderecha. Por ejemplo, se demostró que la legislación de la Unión Europea que obligó a los municipios austriacos a abrir el acceso a la vivienda social a los migrantes previamente excluidos provocó un aumento del apoyo a la ultraderecha¹¹¹. Y en Alemania, el 87 % de los votantes del partido de ultraderecha *Alternative für Deutschland* se opone a aumentar las prestaciones sociales por temor a que esos incrementos acaben beneficiando principalmente a destinatarios “ilegítimos”, entre ellos los migrantes¹¹². La preocupación de que la protección social sea insostenible, y de que los inmigrantes, o los “pobres no merecedores”, se beneficien desproporcionadamente¹¹³, es especialmente pronunciada entre los votantes de clase media que son miembros del grupo mayoritario pero temen quedarse atrás¹¹⁴.

50. Por lo tanto, en sociedades profundamente divididas, el riesgo de una reacción adversa contra la protección social exige una respuesta que combine tres estrategias. En primer lugar, quizá paradójicamente, los planes de protección social universal o la prestación de servicios públicos básicos accesibles a todas las personas (en lugar de los programas centrados exclusivamente en quienes se considera que los necesitan) pueden ser más sostenibles, ya que gozan de un apoyo más amplio por parte de toda

¹⁰⁸ Kalim Siddiqui, “Hindutva, neoliberalism and the reinventing of India”, *Journal of Economic and Social Thought*, vol. 4, núm. 2 (julio de 2017), págs. 142 a 186.

¹⁰⁹ Martin Lukk, “Politics of boundary consolidation: income inequality, ethnonationalism, and radical-right voting”, *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, vol. 10 (enero a diciembre de 2024).

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Charlotte Cavaillé y Jeremy Ferwerda, “How distributional conflict over in-kind benefits generates support for far-right parties”, *The Journal of Politics*, vol. 85, núm. 1 (enero de 2023), págs. 19 a 33.

¹¹² Ursula Münch *et al.*, “Wohlstand in Gefahr? Ursachen und Folgen von Populismus”, *ifo Schnelldienst*, vol. 77, núm. 3 (2024).

¹¹³ Laurenz Ennser-Jedenastik y Monika Köppl-Turyna, “Cushion or catalyst? How welfare state generosity moderates the impact of economic vulnerability on populist radical right support”, documento de trabajo núm. 16 de Agenda Austria (2018).

¹¹⁴ Koen Damhuis y Ekaterina R. Rashkova, “The politics of resentment: what is it and how is it mobilized by populist radical right-wing parties in different contexts?”, *Frontiers in Political Science*, vol. 6 (2024).

la comunidad. De hecho, incluso los hogares de bajos ingresos pueden beneficiarse más de ese tipo de sistemas porque gozan de un apoyo más amplio entre la población¹¹⁵, excepto quizás cuando las diferencias entre grupos son tan marcadas que se percibe que algunos (entre otros, los inmigrantes y los “vagos” que no trabajan) se benefician más que otros¹¹⁶. Para maximizar los efectos de reducción de la pobreza de la protección social, sin comprometer su viabilidad financiera, podría preferirse una forma de “universalismo selectivo”, que combine la cobertura universal con un mayor apoyo a los hogares de bajos ingresos y una mejor orientación geográfica hacia zonas empobrecidas.

51. En segundo lugar, la sostenibilidad política de sistemas de protección social generosos puede reforzarse a largo plazo mediante el aumento del capital social “conector” que une a distintas comunidades. Esto es especialmente importante en países donde existe una estrecha relación entre la marginación económica (y la dependencia de la protección social) y el origen étnico; aquellos países en los que, en otras palabras, la pobreza y la exclusión social se concentran en determinadas comunidades étnicas. De hecho, en tales circunstancias, el apoyo a las políticas redistributivas basadas en impuestos y transferencias sociales tiende a debilitarse, ya que el votante medio puede tener la impresión de que dicha redistribución no beneficiará principalmente a personas como él, sino al endogrupo, como las comunidades romaní y dalit, ciertas minorías étnicas o religiosas, o los migrantes. En realidad, esta es una de las principales razones por las que el Estado del bienestar ha gozado de menos apoyo en los Estados Unidos que en los países europeos. Dado que la sociedad estadounidense está profundamente marcada por factores raciales —con una estrecha correlación entre raza o etnia y situación socioeconómica— el electorado blanco puede percibir que las prestaciones sociales no les favorecen a ellos mismos sino a “los otros”, y eso debilita su disposición a aceptar impuestos más altos y niveles de redistribución más elevados¹¹⁷. Por el contrario, cuanto más se reconcilien las comunidades y menos polarizada esté la sociedad en términos étnicos, de casta, religión o clase, menos tensiones habrá entre la provisión generosa de protección social y el riesgo de una reacción populista.

52. En tercer lugar, las instituciones del Estado deben generar confianza: deben mejorar la transparencia y la rendición de cuentas para asegurar a los votantes que los recursos públicos están bien gestionados y que la protección social funciona¹¹⁸. El chovinismo del bienestar solo surge cuando se instrumentaliza el sentimiento antiinmigrante desde la ultraderecha¹¹⁹, y es el precio que pagan los partidos mayoritarios por no haber explicado de forma adecuada los beneficios de la inversión social para todos.

¹¹⁵ Walter Korpi y Joakim Palme, “The paradox of redistribution and strategies of equality: Welfare State institutions, inequality, and poverty in the Western countries”, *American Sociological Review*, vol. 63, núm. 5 (octubre de 1998), págs. 661 a 687.

¹¹⁶ Dimitri Gugushvili y Tijs Laenen, “Two decades after Korpi and Palme’s ‘paradox of redistribution’: what have we learned so far and where do we take it from here?”, *Journal of International and Comparative Social Policy*, vol. 37, núm. 2 (julio de 2021), págs. 112 a 127.

¹¹⁷ Alberto Alesina y Edward L. Glaeser, *Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference* (Oxford, Oxford University Press, 2004); Reuel Schiller, *Forging Rivals: Race, Class, Law, and the Collapse of Postwar Liberalism* (Nueva York, Cambridge University Press, 2015).

¹¹⁸ Ivanov, “Economic insecurity, institutional trust and populist voting across Europe” (véase la nota a pie de página 45).

¹¹⁹ Romana Careja y Eloisa Harris, “Thirty years of welfare chauvinism research: findings and challenges”, *Journal of European Social Policy*, vol. 32, núm. 2 (mayo de 2022), págs. 212 a 224.

VI. Conclusión

53. La redistribución a través de la protección social no es solo una cuestión económica, sino que también constituye un desafío político que merece ser considerado como tal. Los partidos mayoritarios han creado un terreno fértil para el auge del populismo de ultraderecha al reconfigurar el Estado del bienestar, al contemplar la idea de que la protección social debe dirigirse prioritariamente a los “pobres merecedores” y a la población “nativa”, cuando en realidad se trata de un derecho humano consagrado en el derecho internacional, que debe garantizarse a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, y al presentar la protección social como una carga para los presupuestos públicos, cuando en realidad representa una inversión de futuro con un alto potencial de rendimiento.

54. Es hora de cambiar de rumbo. Los líderes que deseen evitar el retroceso de la democracia deben hacer más por disipar temores y proporcionar seguridad económica. Asimismo, deben evitar un discurso que presente la protección social como una forma de caridad reservada a quienes la merecen. La respuesta a la amenaza que plantea la ultraderecha debe consistir en tomarse en serio la protección social como un derecho humano individual y como un bien público que genera importantes externalidades positivas que benefician a toda la sociedad.